

no estén legalmente decretadas; y el segundo, que desde el 1º de Junio de 1858 no se cobren alcabalas, por haber quedado abolidas en toda la República desde ese día, sin que autoridad alguna pueda ya establecerlas ni cobrarlas.

Considerando: que si bien la Suprema Corte en algunos casos ha negado el amparo á los que se han acogido á esos artículos, ha sido porque no se estimó cumplida la condicion del art. 124, por haberlo impedido obstáculos insuperables, que hoy han desaparecido con la paz que felizmente disfruta.

Considerando: que en el Estado de Puebla ya se abolieron las alcabalas, expidiendo la ley de contribuciones con que han sido reemplazadas y ha desaparecido allí del todo el poderoso motivo que obliga á prolongarlas en otros lugares, y que así no es ya posible sin el mas profundo desprecio á la Constitucion que es la suprema ley de la República, sostener en Puebla ahora las expresadas alcabalas y contribuciones con que habian sido sustituidas, esta Corte de Justicia encontrando justa y razonada la sentencia del Juzgado de Distrito que revisa, en la parte que ampara al C. Francisco Arrijoja, por incompetencia del tesorero de Puebla, para exigirle el pago de \$ 222 por derecho de alcabala, y por no haberse publicado en aquel Estado la ley de presupuesto de ingresos; y no estimando de la misma manera el fallo en cuanto á la omision referente al art. constitucional 124, decreta, apoyándose en los artículos antes citados y en lo dispuesto en el 101 de la misma Constitucion y ley de 20 de Enero de 1869, que se reforma esta sentencia en los términos siguientes:

Primero: Se confirma por sus propios legales fundamentos la sentencia que el Juez de Distrito de Puebla pronunció el 4 de Noviembre de 1874, amparando á D. Francisco Arrijoja por falta de competencia en el tesorero del Estado para proceder en su contra, y no existir en el Estado el

presupuesto de ingresos que legalmente establezca el pago de contribuciones.

Segundo: Se revoca en la parte que declara innecesaria su resolucion sobre la inconstitucionalidad del cobro de alcabalas, y en este punto la Justicia federal tambien ampara y protege al C. Francisco Arrijoja, por violarse en su persona con dicho cobro, el derecho que le conceden los arts. 31 y 124 de la Constitucion federal.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito de Puebla, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José M^o Iglesias.—M. Auza.—Juan J. de la Garza.—José M^o Lozano.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—M. de Castañeda y Nájera.—Ignacio M. Altamirano.—S. Guzman.—Luis Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 26 de 1875.—Luis M^o Aguilar, secretario.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco por Petra Esparza á nombre de su marido Juan Ramirez, contra el acto del C. Gobernador de ese Estado, que le negó á Ramirez el indulto de la pena de muerte á que fué condenado por el jefe político de Tequila.

PEDIMENTO FISCAL.

«El Promotor fiscal dice, refiriéndose al juicio de amparo entablado por Juan Ramirez:

El expresado Ramirez fué condenado á la pena de muerte por el jefe político de Tequila, conforme á la ley de 3 de Mayo de 1873, por el delito de robo y asalto en cuadrilla de que se consideró culpable, cometido en despoblado á inmediacion de Tequila, el 29 de Marzo del corriente año. Remitido el proceso al Ejecutivo del Estado para que resolviera sobre la concesion de indulto, fué negada esta gracia por el ciudadano gobernador, no obstante la opinion de la mayoría de su consejo que estaba porque se concediera, y en consecuencia ordenó al jefe político de Tequila, en oficio de 6 de Mayo último, que procediera á la ejecucion de la pena. Sin embargo, dicha ejecucion no ha tenido lugar hasta hoy por haberse suspendido por orden de este juzgado, dictada el 10 de Mayo anterior, á solicitud de la mujer de Ramirez, quien por telégrama pidió la suspension del acto con apoyo de los arts. 13 y 21 de la Constitucion.

«Comisionado el juez de 1ª instancia de Tequila para que en auxilio de la jurisdiccion federal sustentara el juicio respectivo hasta ponerlo en estado de sentencia, previno á Juan Ramirez, como directamente interesado, presentara en forma su curso de amparo, y así lo verificó éste por el escrito que se registra de fojas 4 á la 8 de los autos alegados: que al negársele por el gobernador del Estado la gracia de indulto, contra la opinion de la mayoría de su consejo y con apoyo de una consulta ó acuerdo de la Legislatura, de 8 de Abril último, ha infringido la frac. 20 art. 16 del decreto núm. 73, que aunque opuesta á la frac. 14, art. 28 de la Constitucion del Estado, ha estado vigente, y solo podrá derogarse por una ley especial que la declare nula; y al aplicar el repetido gobernador ese acuerdo de 8 de Abril, á un delito cometido el 19 de Marzo anterior, ha dado al mencionado acuerdo efecto retroactivo contra la garantía consignada en el art. 14 de la Constitucion general. En consecuencia de lo expuesto, concluye el peticionario apoyando su ocurso,

no en los arts. 13 y 21 que la mujer de este, al solicitar la suspension del acto, indicó servirian de fundamento al amparo, sino en el 14 antes citado y en la frac. 1ª, art. 19 de la ley de 20 de Enero de 1869.

«Antes de emitir el suscrito su parecer sobre lo principal del amparo que se solicita, creó necesario manifestar al juzgado, que la omision cometida por el juez de Tequila de no oír al ministerio público, ni tenerlo como parte en el juicio, llevando éste hasta citar para sentencia al solicitante ó actor, es de tal manera sustancial, que aunque hoy queda subsanada por el presente escrito, deja sin efecto las diligencias posteriores que se practicaron, como todas las pruebas, el término concedido para alegar y la citacion para sentencia. Por fortuna, las mencionadas pruebas son del todo inconducentes, y el juez cometió otra falta decretando primero, que no había hechos que justificar, como es la verdad, y abriendo despues el término probatorio sin necesidad alguna, por ser exclusivamente de derecho el punto cuestionado. Preciso será, por lo mismo, que vuelvan estos autos al juez de Tequila; pero únicamente para que haga saber al peticionario el presente dictámen fiscal, que hace las veces de contestacion á la demanda, y para que al mismo tiempo lo cite para sentencia.

En cuanto á lo principal, ya ha tenido ocasion el promotor en otros juicios semejantes al presente, de manifestar su opinion, y hoy, con verdadero sentimiento, por tratarse de la vida de un hombre, cumple con el penoso deber de repetir las razones en que se apoya su parecer, contrario á la concesion del amparo pedido. Son las siguientes:

Primera: Las leyes reglamentarias de una constitucion no deben ni pueden reformarla.

Segunda: Para que la Constitucion del Estado de Jalisco sea reformada, se necesitan los requisitos que ella misma establece en su art. 46.

Tercera: La ley ó decreto del Estado, núm. 73, es reglamentario de la Constitu-

cion y en la parte que no lo sea, no fué expedido con los requisitos que establece el art. 46 de la misma Constitucion para que la reforme.

Cuarta. Es evidente que la frac. 30, art. 16 de dicho decreto que dice: (habla de las atribuciones del gobernador) "Conmutar penas á los criminales p r vio informe del tribunal que pronunci  sentencia y con entera sujecion al dict men del Consejo,   quien deben de oir en estos casos," es derogatoria, de la frac. 14, art. 28 de la Constitucion del Estado que dice: (habla tambien de las atribuciones del gobernador) "Conmutar penas con los requisitos y en la forma que designe la ley," porque la fraccion de aquel decreto, no establece  nicamente requisitos   formas, sino que en realidad concede al Consejo, que solo es cuerpo consultivo segun el art. 31 de la Constitucion, lo que  sta d  al gobernador exclusivamente.

Quinta. Ciertamente es que los gobernadores del Estado se habian sujetado al decreto n m. 73 para la conmutacion de penas, y que sin el empate del Consejo con motivo del indulto   uno de los asesinos de Bartholly, probablemente todav a hoy se sujetar     l el ciudadano que en la actualidad desempe a  sas funciones; pero tal precedente, no es bastante para derogar la Constitucion, ni puede impedir que el Ejecutivo del Estado ejerza las facultades que aquella le concede.

Sexta. Por lo mismo, la consulta del Congreso, de Abril  ltimo, no fu  un acuerdo econ mico derogatorio de la fraccion citada del decreto n m. 73, porque esa fraccion no ha estado en vigor legalmente, sino por voluntad de los gobernantes que quisieron sujetarse   ella; y si con motivo de la consulta de Abril  ltimo, el gobernador ha ejercido sus facultades constitucionales negando el indulto al reo que solicita el presente amparo, no se puede decir que se aplica una ley retroactivamente, atacando

TOMO. VII.—PARTE II.

la garant a consignada en el art. 14 de la Constitucion general.

"Concluye por lo dicho, el promotor, y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion general, pidiendo al juzgado: que la Justicia de la Union no ampare ni proteja   Juan Ramirez, contra la ejecucion de la pena capital que se le ha impuesto.

"Guadalajara, Julio 10 de 1874.—(Firmado)—A. Camarena."

Es c pia. Guadalajara, Julio 10 de 1874.—A. Camarena

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guadalajara, Julio 31 de 1874.

Vistos: La Sra. Petra Esparza, entabl  amparo y proteccion de garant as en favor de su marido Juan Ramirez, encapillado en Tequila. Como el amparo se entabl  por la v a telegr fica, vino con tal concision y sin ningun fundamento; se pidi  por el mismo conducto explicacion   la interesada, y   pocas horas contest  que   en su marido viol  el jefe pol tico los arts. 13 y 21 de la Constitucion. Este juzgado por la urgencia del caso, la mand  suspender y encarg  al juez de primera instancia de aquel partido, para que sustanciara el juicio de amparo con arreglo   la ley de 20 de Enero de 1869; hasta ponerlo en estado de sentencia, lo que se le encarg  por medio de exhorto, pero lo poco pr ctico que es aquel juez, hizo retardar el juicio   pretexto de que la mujer de Ramirez se encontraba en esta capital; pero como no era seguro, para expedir la continuacion de dicho expediente, se encarg  al juez de Tequila, previnier    Juan Ramirez entablara el juicio de amparo en forma; as  lo verific  apoy ndose en que habiendo solicitado indulto de la pena de muerte al Gobierno del Estado, se lo neg , violando en su persona la garant a que otorga el art. 14 de la Constitucion, pues se le ha aplicado una disposicion retroactiva, lo que procur  probar en su escrito.

Aquel juez pidió informe con justificación al ciudadano jefe político como ejecutor del acto reclamado; pero este señor verdaderamente no cumplió, porque no se ocupó del punto principal, y el juez sin dictar otra providencia y sin pasar el expediente al empleado mas caracterizado de la federación en aquel lugar, como representante del ministerio público, por falta de fiscal como lo previene la ley para todos los lugares en que no hay aquel funcionario, lo devolvió en aquel estado.

Este juzgado le devolvió los autos á aquel juez, por auto del mes próximo pasado, con el objeto de que mandara que el jefe político, cumpliendo con el art. 9º de la ley de 20 de Enero de 1869, ampare, justificado su informe, hasta poner el juicio en estado de sentencia.

El jefe político comprendió al fin de lo que se trataba, é informó que el reo Juan Ramirez fué juzgado con arreglo á la ley de 3 de Mayo próximo pasado, prorogada por la de 13 de Abril del presente, y fué sentenciado á la pena última por robo con asalto á inmediación de aquella población, con circunstancias agravantes, que no puede mandar copia de la sentencia porque la causa la remitió original al Gobierno del Estado para los efectos de la ley, y acompañó un certificado del secretario de Gobierno en que consta haberse derogado el indulto que solicitó el interesado, sin tomar en consideración el dictámen de su Consejo.

El juez encargado de la sustanciación del juicio, cometió algunas irregularidades, que para subsanarlas fué preciso tener por parte al ciudadano promotor fiscal de la federación, para que abriera pedimento regularizado, lo que verificó, y se logró poner el expediente en estado de sentencia.

Este juzgado, considerando: Que el art. 14 de la Constitución general, no es aplicable al caso que se presenta, por las razones que se tuvieron presentes en su discusión y constan en la historia del Congreso escrita por D. Francisco Zarco, y además en los

fundamentos que contiene el pedimento del ciudadano promotor, falla con las proposiciones siguientes:

Primera. La justicia de la Union no ampara ni protege á Juan Ramirez por no haberse violado en su contra la garantía constitucional en que apoyó su pretension de amparo.

Segunda. Notifíquese esta sentencia, haciéndolo por lo que respecta á Ramirez, por medio de exhorto que con inserción de ella se dirija al juez de primera instancia de Tequila; publíquese en el periódico oficial del Estado y dése cuenta á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El juez de Distrito lo sentenció y firmó.
—D. Y. Trejo.—G. J. Gallegos

Es copia. Guadalajara, Agosto 13 de 1874.—G. J. Gallegos.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero 4 de 1875.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Jalisco por Petra Esparza á nombre de su marido Juan Ramirez y ampliado despues por éste, porque habiendo sido condenado á muerte como reo de robo, en concepto del jefe político del Canton de Tequila, y pedido indulto al ciudadano gobernador del Estado, se lo negó aplicándole una disposicion á que dió efecto retroactivo y violando con esto la garantía á que se refiere el art. 14 de la Constitución general, y

Considerando: que segun el art. 28 de la Constitución del Estado de Jalisco, es facultad del gobernador indultar á los reos, pero en el modo y términos que prescribiera la ley reglamentaria del art. que le da esa facultad; que esta ley mandó que siempre debiera hacerlo con consulta de su Consejo de gobierno, y sujetándose á lo que la mayoría de este decidiera.

Considerando: que en el caso, habiendo dicho Consejo opinado por el indulto, no pudo el gobierno negarlo.

Considerando: que el acuerdo económico del Congreso refiriéndose á un hecho particular que con motivo de un empate habido en dicho Consejo, no ha podido derogar lo prescrito por la Constitución del Estado y el art. 16 de la ley que lo reglamentó, el gobernador estaba obligado á conceder el indulto al quejoso.

Considerando: por otra parte, que éste solicitó su indulto antes de que existiera tal acuerdo, y con presencia del artículo del Código fundamental de la República que declara inviolable la vida del hombre, mandando no pueda privársele de ella, sino en los únicos casos que lo permite y con exacta aplicación de las leyes que se la quitan. Por tales consideraciones se declara: que se revoca la sentencia pronunciada respecto de este juicio á tres de Julio del año próximo pasado, que niega el amparo al quejoso, y es decreta: que la Justicia de la Unión ampara y protege á Juan Ramírez contra el acto del ciudadano gobernador del Estado de Jalisco que le negó el indulto de la pena de muerte á que fué condenado por el jefe político de Tequila.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Sinón Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico.—México, Marzo 11 de 1875.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango, por D. José Ponciano Fernandez, contra el juez conciliador de la municipalidad de Villa Lerdo, del Partido de Mapimé, quien como ejecutor de una orden del gobierno del Estado comunicada al jefe político de Mapimé, le impidió ejercer como médico y cirujano.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El ciudadano jefe de Hacienda del Estado encargado de llevar la voz fiscal, dice: que Don J. Ponciano Fernandez pide amparo contra las providencias del Juez Conciliador de Villa Lerdo, en virtud de las cuales lo suspendió en el ejercicio de su profesión médica, violando en su persona las garantías que otorgan los arts. 4 y 16 de la Constitución general de la República.

Por el informe de fojas 9 y 10, se viene en conocimiento, de que el motivo de haber suspendido al quejoso en el ejercicio de la profesión médica, fué el de no haber presentado su título respectivo para justificar que es profesor de medicina, en cuyo solo caso podría permitírsele ejercerla. Consta por el propio informe, que aquella disposición emanó del gobierno del Estado, que es autoridad competente para expedirla, y aun lo es también el Juez Conciliador de Villa Lerdo y cualquiera otra autoridad legítima, para impedir todo abuso que produzca perjuicios públicos; no pudiendo ser estos mayores que los muy funestos que puedan provenir de poner la vida de las personas enfermas en manos de otra que no posea los conocimientos de la ciencia, indispensables para que la autoridad y el público le deposite su confianza en tan delicada materia.

El quejoso, por su parte, no ha presentado ningún título con que justificar que es profesor recibido en la ciencia médica,